



**Oficio No.** FGR/UETAG/005197/2024

**Asunto:** Respuesta a la solicitud de información.

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2024.  
"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del  
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

**FOLIO. – 330024624002807.**

**Presente.**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20° del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; en relación con su **solicitud de acceso a la información**, la cual dirigió específicamente a la **Fiscalía General de la República**, consistente en:

*"Solicito que me respondan, de manera fundada y motivada, lo siguiente: 1. ¿Es ilegal revender boletos para espectáculos musicales y de entretenimiento? 2. ¿Quién es o quiénes son las autoridades competentes para investigar y sancionar a una persona que revende los boletos referidos en la pregunta anterior? 3. ¿En su caso, la actividad, al generar ingresos, genera obligaciones fiscales? 4. ¿Genera efectos indeseables jurídicamente relevantes para el mercado? Es decir, este mercado negro ¿perjudica al consumidor con el aumento artificial de los precios de los bienes y servicios adquiridos?, ¿la COFECE puede y debe investigar y sancionar estas conductas? 5. En su caso, ¿esta página, <https://www.instagram.com/findmyticketmx/?hl=en>, es legal?, ¿puedo hacer una similar y dedicarme a la reventa de boletos? 6. ¿Cuántos impuestos ha pagado esa empresa, findmyticketmx, por sus actividades desde 2021 hasta la fecha? 7. En caso de considerarse incompetentes, ¿pueden y tienen el deber de remitir esta solicitud a la autoridad que consideran competente? 8. En caso de que las actividades descritas sean ilegales, ¿qué acción legal se puede ejercer para que se investigue y sancione a los responsables y se cierre la página de ventas ilícitas?, ¿ante qué autoridad o autoridades? Aunado a lo anterior, solicito que esta solicitud no sea pública y que se testen los datos de la página y del propietario del negocio y de la página, Eduardo Michel Díaz Gujón, así como su domicilio ubicado en Ocotepéc 332, San Jerónimo Lídice, La Magdalena Contreras, 10200, Ciudad de México."*

En primer lugar, es necesario precisar que la Fiscalía General de la República, es competente para investigar y perseguir hechos posiblemente constitutivos de delito, en materia federal, en términos de los artículos 21, 102 apartado A, 104 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción I y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 2, 3, 5 y 7 de la Ley de la Fiscalía General de la República, así como los artículos 1, 5 y 11 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, para ello realiza la integración de expedientes por la comisión de los delitos tipificados en el Código Penal Federal y leyes especializadas; cuyo resultado son las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas respectivamente.

Ahora bien, se hace de su conocimiento que, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el derecho de acceso a la información comprende **solicitar, buscar y recibir información** de cualquier órgano o dependencia de los poderes de la unión, en el ámbito de aplicación Federal u otro diferente que reciba recursos públicos.



Partiendo de esta concepción de máxima publicidad, la totalidad de la información debe de estar al alcance de todas las personas (salvo sus excepciones), y las autoridades tienen la obligación de otorgar el acceso a los documentos generados, obtenidos, adquiridos, transformados o que se encuentren en su posesión, de acuerdo con sus competencias o funciones que le sean asignadas, observando las características físicas en las que éstas obren, **sin la necesidad de elaborar o procesar información para la atención de las solicitudes que se les hagan.**

A propósito de ello, se debe de tomar en cuenta que la ley define a los documentos en una amplia gama de modalidades, siendo de manera enunciativa, más no limitativa, los expedientes, reportes, estudios, actas, oficios memorandos, o cualquier otro registro que sea documentado en el ejercicio de sus funciones, sin importar la fuente, fecha o la forma de manifestación (escrito, sonoro, electrónico, holográfico, etc.), ni su fuente o fecha de elaboración.

De tal suerte, una solicitud de acceso a la información debe de estar encaminada a recibir cualquier documento u expresión documental en el marco de las vertientes antes descritas, que se encuentre en cualquier autoridad que reciba recursos públicos, y que así sea requerida por los particulares, sin que de ello devenga la generación de documentos específicos.

Lo previo se retoma en el artículo 130, párrafo cuarto de la **Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, en donde se establece que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos **que se encuentren en sus archivos** o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

Robustece lo anterior, lo sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el criterio de interpretación **SO/003/2017**, el cual se inserta a continuación para su pronta referencia:

***"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información."***

Con tales consideraciones a la vista, toda vez que de una lectura minuciosa a su solicitud de información se observa que ésta se encuentra formulada a manera de consulta, es que, se estima deviene inatendible ésta en los términos planteados, ello al no apegarse a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**UNIDAD ESPECIALIZADA EN**  
**TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL**  
**FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

Vo. Bo.: Lic. MACC/Elaboró: BJQA